El Salvador

CIDAI
CENTRO DE INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Proceso

informativo semanal

Año 27, Nº 1216

Noviembre 1º, 2006

ISSN 0259-9864

"El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte": Ignacio Ellacuría

Editorial 2

Una importante, pero insuficiente crítica al gobierno y a los empresarios

Político 4

La (in)seguridad pública y la (in)eficacia policial

Económico 6

Los resultados de Red Solidaria

Reporte IDHUCA 9

Estado en crisis (I)

Documento 11

Sandinistas: no voten por el falso sandinismo, por *Ernesto Cardenal*

Documento 13

Segunda encuesta de percepción ciudadana *Municipio de Guaymango, departamento de Ahuachapán*

editorial

Una importante, pero insuficiente crítica al gobierno y a los empresarios

Durante las dos últimas semanas, buena parte del debate público ha estado marcado por el discurso pronunciado por el embajador estadounidense, Douglas Barclay, en la sede de FUSADES, el pasado 16 de octubre, así como por posteriores declaraciones del diplomático en torno a los tópicos abordados en ese discurso. De entrada, hay que decir que prácticamente todo lo señalado por el embajador Barclay en torno a la grave situación de El Salvador en materia de criminalidad ha sido dicho antes, con igual o mayor contundencia, por distintas instituciones nacionales, como la UCA, o internacionales como el PNUD, sólo que las autoridades prefirieron hacer oídos sordos a sus análisis y diagnósticos. En este sentido, no hay novedad en lo dicho por el embajador estadounidense; empero, sí hay novedad en que él dijera lo que dijo, ante quienes lo hizo (los empresarios e intelectuales vinculados FUSADES) y el tono que usó. Tampoco se tienen que obviar las graves omisiones, tanto en su discurso como en otras declaraciones suyas, así como uno que otro franco desatino –por ejemplo, su creencia de que los jueces proceden según se les antoja—, quizás debido a su desconocimiento sobre cómo funcionan las instituciones en el país.

Veamos el diagnóstico del embajador Barclay sobre la situación de violencia y criminalidad que impera en El Salvador en la actualidad. "Hace tres años yo dije –sostuvo el embajador en su discurso ante FUSADES— que el problema más urgente para el país era aumentar el Producto Interno Bruto en un cinco por ciento al año. Todavía creo en eso y me siento complacido al ver que el ritmo de crecimiento puede alcanzar el cuatro por ciento este año. Pero para que este ritmo de crecimiento continúe, El Salvador debe poner un alto a la violencia criminal. Ahora". Es decir, los asesinatos –un promedio de 10 al día en lo que va de 2006—, las extorsiones –a empresarios, jugadores de fútbol, maestros y familiares de soldados que están en Irak— y la violencia de todo tipo no sólo tienen en jaque a la sociedad salvadoreña, sino que impactan la economía –por ejemplo, según las cifras de Barclay, el 11% del PIB es invertido en seguridad, en lugar de ser invertido en producción—. En la misma línea, sostuvo el diplomático, "el crimen violento obviamente desmotiva la inversión extranjera, incluyendo la inversión proveniente de Estados Unidos. El crimen tiene potencial de destruir todas las oportunidades creadas por el CAFTA, por el Acuerdo de la Cuenta del Reto del Milenio y por otras iniciativas comerciales y económicas".

Constatada la crítica situación del país, el embajador Barclay dio un paso más: lamentó la falta de presión pública hacia las autoridades gubernamentales, cuya responsabilidad en la seguridad ciudadana es ineludible, y cuestionó la falta de voluntad política para enfrentar y solucionar el problema de la violencia criminal. "¿Dónde está –interrogó Barclay a su auditorio en FUSADES— la condena pública masiva y la presión hacia sus representantes electos, tanto hacia el gobierno central, como al poder legislativo y los gobiernos locales para lograr un programa integrado contra la criminalidad? ¿Dónde están las demostraciones de unidad entre los líderes

de todos los sectores y tendencias políticas para solucionar este problema nacional? ¿Dónde está la voluntad política para enfrentar este problema y solucionarlo ya?" Y remató: "la responsabilidad más importante de cualquier gobierno democrático es otorgar seguridad para sus ciudadanos bajo el Estado de derecho".

El embajador estadounidense no lo dijo expresamente, pero es claro que en su opinión el gobierno de Antonio Saca ha fracasado en su responsabilidad más importante, es decir, en la responsabilidad de brindar seguridad a los salvadoreños y salvadoreñas. En otras palabras, el cuarto gobierno de ARENA ha fallado en sus tareas de liderazgo político. Y ha fallado porque no ha hecho de la seguridad ciudadana su máxima prioridad ni ha presentado "un programa unificado de seguridad y contra la criminalidad, completo e integral" ni ha buscado "los recursos para implementarlo". Palabras duras, aunque en absoluto nuevas, para el gobierno de Saca. También palabras duras para la gran empresa privada, cuyos líderes no sólo no han exigido ese liderazgo, sino que tampoco lo han apoyado financieramente.

Y aquí sale a relucir la responsabilidad de la gran empresa privada en el combate y la erradicación de la violencia criminal. Porque, para combatir el crimen, se requieren recursos, puesto que un Estado en crisis fiscal permanente no puede asumir los desafíos que le plantea la seguridad ciudadana. Por eso, en la óptica del embajador Barclay, es urgente que los empresarios paguen los impuestos que deben. No hacerlo los convierte en unos "gorrones que le roban la posibilidad de un mejor futuro (a) sus conciudadanos". "¿Están ustedes preocupados –los cuestionó— de cómo el gobierno va a gastar el dinero que tanto les ha costado ganar? No pagar sus impuestos –les hizo ver— no es la respuesta a esa preocupación". Y el tema de la resistencia de los empresarios a pagar los impuestos que les corresponden es sustancial para el diplomático estadounidense, pues –tal como declaró en una entrevista concedida a un matutino el 30 de octubre— "los estudios muestran que... hay un 64% de impuestos que no han sido recaudados. Si esos impuestos fueran recaudados, tuvieran suficiente dinero para hacerlo, más que suficiente".

Ciertamente, el embajador Barclay se ha quedado corto en lo que se refiere a la responsabilidad de los grandes empresarios en la situación de violencia criminal que golpea en estos momentos al país. Apenas se ha fijado en la evasión fiscal, sin prestar atención a otros delitos como el lavado de dinero, la doble contabilidad y la violación de leyes medioambientales, por no hablar del fracaso del modelo económico terciarizado. Tampoco ha prestado atención a los mecanismos legales que favorecen a la acumulación desproporcionada de riqueza —mecanismos que los distintos gobiernos de ARENA han defendido— y que permite que los empresarios más ricos no paguen los impuestos que les corresponde pagar.

Por último, el embajador estadounidense se quedó corto con el tema de la corrupción. Ni las extorsiones ni los robos en autobuses o en la calle son corrupción, sino el uso de los recursos públicos para beneficio privado. Y de esto las distintas administraciones de ARENA –principalmente la de Francisco Flores— saben bastante. Los grandes empresarios salvadoreños y las corporaciones a las que se hayan vinculados son ajenos a esa corrupción en ARENA, partido al cual han beneficiado con sus aportaciones y del cual han recibido amparo y protección para que negocios florezcan sin ningún obstáculo.

La (in)seguridad pública y la (in)eficacia policial

En las últimas semanas, la violencia social y las altas tasas de criminalidad han primado como notas centrales en los medios de comunicación y en los distintos espacios de debate. En el ambiente, circulan comentarios y críticas de parte de diversos sectores sociales hacia la gestión gubernamental en materia de seguridad. En términos políticos, es esta una oportunidad abierta para que la sociedad actúe y presione al gobierno a fin de que éste cumpla con sus obligaciones. No obstante, quienes han logrado hacer oír su voz son representantes de sectores poderosos o ligados, de una u otra forma, al partido ARENA.

El llamado a unir esfuerzos de la sociedad civil que en su momento hicieran los presidentes de los tres órganos del Estado fue sólo un acto publicitario que, además, le restó protagonismo a la propuesta lanzada por el FMLN y su estrategia de lucha ciudadana contra la delincuencia.

Tras el anuncio oficial, desde hace dos semanas, el gobierno ha sido blanco de críticas de parte de algunos sectores considerados tradicionalmente como sus aliados incondicionales. Lideres religiosos, gremios empresariales y miembros del cuerpo diplomático destacado en el país –como el embajador estadounidense Douglas Barclay— han hecho duras críticas a la gestión de ARENA en torno a la seguridad pública.

Si bien las posturas al respecto varían, el elemento común a todas las voces críticas ha sido, con palabras más o palabras menos, la exigencia al Estado para que combata eficazmente el crimen y garantice la seguridad ciudadana.

Ausencia oportuna

Después de las declaraciones de Barclay, grupos de presión como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Cámara de Comercio lanzaron un ultimátum temporal al gobierno para que éste propusiera mecanismos efectivos para frenar la delincuencia y disminuir la cifra de delitos cometidos a diario. Como una respuesta parcial a tales exigencias, a inicios de esta semana, el gobierno anunció nuevas medidas de combate al crimen.

Por el momento, cabe destacar que las críticas al gobierno de Antonio Saca salieron a luz en el preciso momento en que el mandatario se encontraba de gira por Asia. Este hecho es llamativo en sí mismo, pues la gestión de Saca –y personalmente él como líder— pareciera salir bien librada de todo señalamiento. No cabe duda de que estas críticas habrían tenido mayor impacto negativo para el gobierno si el principal delegado en el poder hubiera estado en el país. Asimismo, ante los medios de comunicación el presidente no brindó declaraciones; simplemente, de su parte, no hubo reacción. De ello se encargaron algunos miembros de su gabinete.

En este sentido, podría decirse que la imagen del mandatario, una vez más, ha sido resguardada. Como si nada, a inicios de esta semana, Saca apareció ante los medios para presentar, junto a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Asamblea Legislativa, una propuesta para combatir la violencia. Más allá de la cobertura mediática en torno al hecho, Saca no fue cuestionado sobre los señalamientos realizados a su gestión ni sobre el fracaso de sus políticas de seguridad pública.

Actuación policial: milagros o eficacia

No obstante lo bien librado que pueda salir Saca ante la opinión pública, una institución que sí se ve afectada por las críticas al gobierno es la Policía Nacional Civil (PNC), responsable directa de velar por la seguridad de los ciudadanos. Año con año, esta institución ha visto reducido su campo de acción debido a carencias presupuestarias, deficiencia en sus cuadros policiales, mínima capacidad de investigación y seguimiento al delito, y su escasa capacidad de operación.

A propósito del plazo enviado por la empresa

privada, el titular de la PNC, Rodrigo Ávila, sostuvo que algunos señalamientos son mas una reflexión que una crítica. En contraste, aseguró que, dadas las carencias de la institución, no puede hacer milagros. Al respecto de esta declaración, conviene recordarle a este funcionario que los milagros se esperan de los santos; de los funcionarios públicos, los ciudadanos esperan respuestas y soluciones eficientes, lo cual no es más que la mínima tarea a cumplir por todo servidor público responsable ante la población. Del mismo modo, el jefe de la corporación policial ha declarado a los medios que el problema de la violencia y criminalidad se debe, en su mayoría, a las pandillas, pese a que los datos registrados por algunas organizaciones niegan este hecho. Es decir, Ávila no parece tener las competencias ni los conocimientos adecuados para desempeñar la tarea que le corresponde como director de la PNC.

Mismas respuestas a viejos problemas

En repetidas ocasiones se ha insistido en que no sólo la PNC, sino también otras dependencias estatales carecen de los recursos mínimos necesarios para llevar a cabo sus funciones. También, se ha criticado la falta de un enfoque preventivo que busque combatir la criminalidad, sin recurrir exclusivamente a medidas represivas ni limitarse a lanzar planes reactivos y a corto plazo.

Pese a ello, como se apuntaba antes, en respuesta a un clima de opinión negativo, el gobierno ha lanzado lo que considera es una repuesta a los señalamientos y críticas otorgadas por empresarios, diplomáticos y otros actores influyentes. Así, el ministro de Gobernación, René Figueroa, y el presidente de la República, Antonio Saca, difundieron a inicios de esta semana un “nuevo” plan que busca combatir la delincuencia. Según los funcionarios, el aumento de efectivos policiales y de militares en tareas como patrullajes, una nueva propuesta de ley contra el crimen organizado y la conformación de una comisión sobre violencia –integrada por actores sociales de prestigio— serán la solución a los problemas de inseguridad que los salvadoreños han estado esperando desde hace años y la propuesta que los empresarios y el embajador Barclay exigieron con vehemencia.

Sin embargo, estas medidas adolecen de la misma miopía gubernamental de siempre. Los problemas sociales o las causas que permiten el brote de violencia y de la criminalidad de nuevo no se atacan, pese a que existen diagnósticos certeros sobre la situación del país. En esa línea, el gobierno una vez más demuestra que cuando se trata de generar una imagen publicitaria favorable, sus funcionarios son expertos en la materia; no así cuando se trata de actuar con eficacia y eficiencia en beneficio de la sociedad en general.

En definitiva, estas medidas reflejan la falta, en extremo, de una visión conjunta sobre el futuro de la sociedad salvadoreña y, sobre todo, de un trabajo coordinado que ataque las razones por las cuales la violencia se ha desbordado y se expresa ahora en prácticas generalizadas como la extorsión y el chantaje. Ante estos retos, la sociedad también debe responder mediante cuestionamientos directos hacia los funcionarios públicos. Si el director policial se queja de la falta de recursos y, además, acepta las debilidades que el sistema tiene, es necesario que los ciudadanos exijan su renuncia.

Por otro lado, los funcionarios deben ser capaces de aceptar sus errores y, como muestra de honestidad, declararse incompetentes ante los problemas sin resolver de la sociedad. En ese sentido, sería un buen ejercicio ético que algunos funcionarios acepten de una buena vez sus debilidades y renuncien a sus cargos, ya sea por falta de competencia o por falta de apoyos mínimos necesarios. Mientras la sociedad no logre exigir una buena actuación a los servidores públicos, continuará la tendencia de éstos a brindar débiles argumentos para justificar su ineficacia y prevalecerá la falta de respuestas certeras a las necesidades de la población.

Los resultados de Red Solidaria

La semana pasada, el gobierno presentó los resultados de un año de trabajo en la atención a las familias en extrema pobreza. La actividad fue presidida por la Coordinadora del Área Social de la Presidencia, Cecilia Gallardo; la Directora Ejecutiva de Red Solidaria, Carolina Ávalos; y el presidente del FISDL, Andrés Rovira; entre otros. En el evento se destacaron los logros obtenidos en los tres ejes de acción que conforman el plan gubernamental: las transferencias de dinero a las familias; el fortalecimiento en la oferta de servicios públicos básicos; y la inversión en el desarrollo productivo a través del microcrédito.

En el primer componente del programa –Red Solidaria a las Familias–, el gobierno gastó $2.5 millones. Estos recursos fueron transferidos directamente a 18,540 familias de 22 municipios del país; en promedio, cada familia recibió cerca de $136. De acuerdo a lo planificado, en 2005 y 2006 debe iniciar la atención a los 32 municipios en "pobreza extrema severa". Según el gobierno de Antonio Saca, los 10 municipios que faltan para alcanzar la meta serán atendidos antes del cierre del año. En 2005 y 2006, el Ejecutivo prevé gastar $4 millones en 26,554 familias de 32 municipios del país.

Los gastos en construcción de infraestructura básica y caminos pavimentados –segundo eje de acción del programa– ascienden a $11.8 millones. De este monto, el FISDL ejecutó $4.6 millones en proyectos de agua potable, saneamiento básico de comunidades y centros escolares, electrificación e infraestructura estratégica. En este componente, la Unión Europea cooperó con $7 millones, canalizados mediante el Programa de Alivio a la Pobreza (PAPES). Aún falta que el FISDL complete varios proyectos de agua potable ($1.7 millones) y el MOP realice obras valoradas en $5.9 millones.

Bonos en educación y salud de Red Solidaria*

(Transferencias en dólares de EEUU)

Municipio	Familias beneficiadas	Total transferido
Caluco	1,150	202,475
Carolina	1,123	191,845
Cinquera	219	38,070
Cuisnahuat	1,434	247,805
Gualococti	527	91,405
Guatajiagua	1,435	253,620
Guaymango	2,451	428,645
Joateca	524	90,730
Jutiapa	1,048	180,750
Nueva Granada	1,026	173,505
San Antonio	935	159,030
San Fernando	254	45,865
San Isidro	415	84,135
San José Canquasque	251	42,820
Torola	486	98,290
Total	**13,278**	**2,328,990**

Fuente: www.redsolidaria.gob.sv

*Sólo incluye los primeros 15 municipios beneficiados por el programa

Datos consolidados hasta septiembre de 2006

A través del tercer eje de acción –coordinado por el Ministerio de Agricultura– se benefició a 11,825 familias. La inversión enfocada en las zonas rurales a través de "Red de Sostenibilidad a la Familia" fue de $690,106. Los recursos se gastaron en sistemas de microrriego, entrega de semillas para la siembra, microcréditos y conservación de suelos, entre otros.

En coordinación con "Red Solidaria a las Familias" –componente que incentiva la demanda de servicios públicos–, las carteras de Salud y Educación incrementaron la oferta de servicios en la zona rural. El Ministerio de Salud gastó $6 millones para llevar a cabo 314,755 consultas en 65 municipios. El Ministerio de Educación realizó una inversión

de $5.2 millones para aumentar la matrícula de estudiantes en 32 municipios. Como resultado, aumentó la cantidad de matriculados en 15 municipios del país. En materia de salud, se registró un incremento en los controles infantiles y prenatales.

El "espíritu" de Red Solidaria

En febrero de 2005 se presentó al interior del Ejecutivo el documento *Programa Social de Atención a las Familias en Extrema Pobreza: Red Solidaria*. Este documento conceptual contiene los principios básicos del programa: promoción de la equidad; integralidad de las acciones; focalización de las inversiones en los grupos de extrema pobreza; transparencia en la selección de los beneficiarios; acercar la oferta a la demanda; cumplimiento de compromisos y responsabilidades; y monitoreo y evaluación de los resultados. De los siete principios, el primero contiene la "filosofía" del programa, el resto de ellos son más de naturaleza operativa.

Según la Secretaría Técnica de la Presidencia y la Coordinación del Área Social –las instancias del Ejecutivo que elaboraron el citado documento–, "uno de los obstáculos para reducir la pobreza y mejorar los indicadores de desarrollo humano en El Salvador es la desigualdad existente entre grupos poblacionales tanto a nivel interregional como intrarregional. De ahí la importancia de utilizar herramientas de focalización como un instrumento de política que permita cerrar la brechas existentes […] El Programa reconoce que una de las mejores maneras de promover la equidad es ofrecer igualdad de oportunidades en salud, nutrición y educación básica para la población más pobre". En pocas palabras, Red Solidaria surge como un programa que persigue la reducción de las desigualdades.

Básicamente, Red Solidaria busca reducir o eliminar las diferencias que existen en los niveles educativos, de salubridad y nutrición entre las zonas urbanas y rurales. El tercer componente del programa –Desarrollo Productivo– busca reducir las diferencias en los niveles de ingresos que existen entre el campo y la ciudad. Desde la perspectiva económica, esta lucha por la reducción de las desigualdades es compatible con el proceso de formación de "capital humano". A través de mejoras en los niveles de salud, educación y nutrición se está formando una fuerza de trabajo que puede venderse en mejores condiciones en el mercado laboral. Esto significa que gran parte del éxito del programa depende de que las personas beneficiadas logren insertarse en actividades económicas productivas a través de un empleo digno.

Las limitaciones de Red Solidaria

El tema sobre las desigualdades no fue abordado ampliamente en la elaboración del documento conceptual de Red Solidaria. Este aspecto es fundamental para comprender la pobreza y promover soluciones de largo plazo. En forma tácita, el documento menciona que el problema de la desigualdad es fruto de un "descuido histórico" del Estado en la provisión de servicios básicos a los más pobres del país. Si bien eso es cierto, olvida que, junto al "descuido" estatal, también están las malas condiciones laborales que los habitantes de las zonas rurales han sufrido durante décadas. En otras palabras, los problemas de pobreza y desigualdad tienen, por así decirlo, una "dimensión pública" –que se expresa en los bajos niveles de cobertura de la política social– y una "dimensión privada" –que se expresa en el pago de un salario que difícilmente suple las necesidades básicas del trabajador y su familia–.

El Estado puede invertir una gran cantidad de recursos para mejorar las condiciones de vida de los grupos sociales más necesitados, pero también es importante que éstos tengan acceso a buenas condiciones laborales; de lo contrario, las inversiones en "capital humano" no serán rentables socialmente. Si los empleadores argumentan que las alzas salariales sólo obedecen a incrementos en

la productividad laboral, los trabajadores con mayor educación, sanos y bien alimentados deben recibir mejores salarios, pues la educación, la salubridad y nutrición son aspectos que inciden directamente sobre la productividad laboral.

Se puede argumentar que Red Solidaria es un programa que beneficia solamente a los niños que atraviesan una fase crítica de desarrollo. Las inversiones en salud, educación y nutrición se enfocan en los niños, no en los adultos. Pero estas inversiones tienen por finalidad preparar una generación más sana y educada que pueda aspirar a mejores condiciones de vida que la que tienen sus padres. Red Solidaria tendrá éxito en el largo plazo si esa generación encuentra las condiciones favorables para desarrollar sus potencialidades. De lo contrario, los logros en materia de salud, educación y nutrición pueden verse "amenazados" si en el futuro no se encuentran buenas condiciones laborales. Por ejemplo, en el país existen una gran cantidad de jóvenes que tienen todos los atributos que Red Solidaria promueve en la población beneficiaria: altos niveles de educación, salud, nutrición, acceso a agua potable, energía eléctrica, Internet, etc. Son los cientos de jóvenes recién graduados de las universidades que no encuentran empleo y optan por emigrar a los EEUU. Ellos tienen las características que impulsa Red Solidaria, pero eso sirve de poco en un país donde el modelo económico no permite mejores condiciones de empleo.

La desarticulación de la política económica y la política social

En marzo del año pasado, en el lanzamiento de Red Solidaria, el presidente de la República, Elías Antonio Saca, dijo: "este día presento oficialmente a todos ustedes Red Solidaria, nuestra más importante iniciativa en el área social. Esta es una de las apuestas más importantes de nuestro gobierno, porque estoy convencido que lo social no es complemento de nada, lo social es la base de todo". Con estas palabras, el mandatario quería demostrar que su forma de gobernar era diferente a la de los anteriores gobiernos de ARENA. Durante la gestión de Francisco Flores, creció la percepción de que los gobiernos de ARENA enfatizaban sólo "lo económico" –privatizaciones, reforma tributaria, dolarización, tratados de libre comercio– y olvidaban "lo social".

Actualmente, a pesar de que el gobierno implementa una política social más activa, todavía hay un sesgo a favor de "lo económico". El gobierno esta convencido de que la mejor estrategia de crecimiento económico es la firma de acuerdos comerciales. Según esto, para lograr el desarrollo del país basta con focalizar el gasto social y abrir la economía. Esta es una concepción equivocada, pues olvida que la apertura excesiva de la economía a los mercados internacionales también puede afectar a los más pobres del país. Por eso, es necesario que el gobierno busque un mejor balance entre la política económica y la social.

Por otro lado, y desde una perspectiva macroeconómica, la estructura tributaria obliga a que los sectores sociales de más bajos ingresos aporten más para el financiamiento de una política social focalizada en los más pobres. Es decir, por un lado, se focaliza la política social en los más pobres, y por el otro, los sectores de más bajos recursos son los que más aportan al fisco. Esto es tapar un hoyo abriendo otro.

Finalmente, en el lanzamiento de Red Solidaria, el presidente de la República sostuvo que "la pobreza no es sólo la ausencia de ingresos; la pobreza es más que todo, ausencia de posibilidades, ausencia de oportunidades". En base a lo anterior, se puede decir que hay muchas personas de la clase media que bordean la situación de pobreza. Esto se debe a la falta de oportunidades de empleo, a la imposibilidad de trabajar para lograr un salario que permita su propia manutención y la de sus familias.

Estado en crisis (I)

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) denomina "Estados en crisis" a los países donde *"el gobierno no ejerce efectivo control sobre su territorio, es incapaz o no tiene la voluntad de asegurar servicios vitales a partes significativas de su población, en donde su legitimidad es débil o inexistente, y donde el conflicto violento es una realidad o un gran riesgo"*. Sin lugar a dudas, El Salvador es uno de esos desde hace un buen rato y así lo consideró, por fin, USAID en su informe de 2005 titulado "Estrategia para los Estados frágiles". La nación salvadoreña compartió semejante "distinción" con Sudán, Afganistán y Sierra Leona; los dos primeros en África y el tercero en Asia, pero todos en guerra. Los homicidios –arriba de diez diarios–, las extorsiones y el control que las maras ejercen sobre algunas zonas son los factores que justificaron tan penosa designación y que han hecho del territorio nacional el más violento en Latinoamerica.

No obstante, se debe tener claro que a esta alarmante situación no se llegó de la noche a la mañana. Las torpezas cometidas desde hace muchos años, pero sobre todo a partir de 2003 cuando Francisco Flores anunció la Ley Antimaras y el Plan Mano Dura, favorecieron el incremento de la delincuencia; sus inútiles redadas policiales crearon en los criminales una sensación de impunidad que los envalentonó y les hizo creer que podían delinquir sin que el Estado pudiera hacer nada. Así, la tasa de asesinatos –que ese año comenzaba a disminuir– pasó de 36 a 55.5 por cada 100,000 habitantes, cifra que duplica el promedio regional.

Por eso, cuando Flores se lanzó en su aventura con evidentes propósitos electoreros, la UCA y otros sectores de la sociedad demandaron con mas vehemencia seriedad en el combate de la violencia con una política criminal eficaz e integral que vaya más allá de las medidas represivas. Sin embargo, las autoridades no sólo ignoraron esos llamados sino que además atacaron a quienes los hacían, acusándolos de ser protectores de "mareros". Por esa miopía y terquedad, el problema creció hasta llegar al nivel actual.

Tan grave es la situación que ya hizo reaccionar también a los aliados gubernamentales tradicionales. El embajador estadounidense fue el primero que reprendió fuertemente al gobierno de Antonio Saca y a los partidos políticos. Su discurso era el de quien está seguro que, pese a ser extranjero, puede entrometerse e incluso influir en la política interna sin que le pase nada. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), de la cual Saca fue presidente, igual habló. Dado que la delincuencia ha tocado sus bolsillos, ya que ahora dedican buena parte de sus ingresos a pagar a extorsionistas y comprar seguridad privada, los empresarios nacionales e inversionistas extranjeros intimaron al gobierno para que adoptara medidas eficaces o comenzarían a impulsar acciones de presión. Y sucedió lo que ya se esperaba. Más tardaron la ANEP y la embajada estadounidense en abrir la boca, que Saca en reaccionar y anunciar otro "plan". ¡Cómo se nota quién manda!

La propuesta que presentó podrá acallar por un momento las críticas y generar expectativas, pero difícilmente resolverá el problema porque lo planteado es más de lo mismo. Como ha sucedido antes, se anuncian las cosas con mucha pompa y se ofrecen como novedosas e integrales; sin embargo, no es más que la creación de otra ley –ahora contra el "crimen organizado"– más el aumento de la vigilancia policial y la instauración de una comisión contra la violencia. Anteriormente, el gobierno de Saca había prometido algo parecido. De hecho, prometió un país seguro en la campaña proselitista e inició su mandato instalando mesas de trabajo con las que logró el apoyo de varios sectores para reformar el Código Penal, el Procesal Penal y la desaparecida Ley del Menor Infractor. También obtuvo propuestas para prevenir la violencia y rehabilitar a los delincuentes, que al final ni siquiera las tomó en cuenta.

Pero los publicitados anuncios en materia de seguridad no acabaron ahí. Los altos funcionarios encargados de la materia han seguido dando palos de ciego, imponiendo leyes que contrarían un Estado de Derecho que para ellos es desconocido. Allanamientos de viviendas, creación de la Policía Rural, organización de grupos anti pandillas, anti homicidios, anti extorsiones, y el aumento de los Grupos de Tarea Conjunta fueron otras de las acciones ejecutadas, pero nada de eso resolvió el problema.

La propuesta que recién ha presentado Saca consiste en crear juzgados especiales con los que presuntamente se agilizará el proceso judicial y se unificará el criterio con el cual se evalúan los presuntos delitos. En principio parece acertado, porque el actual funcionamiento judicial es engorroso y tanto la Policía Nacional Civil (PNC) como la Fiscalía General de la República (FGR) y los jueces tienen estándares distintos para seleccionar pruebas, valorarlas y utilizarlas para determinar la culpabilidad o inocencia de un delincuente. A la larga, esta situación desanima a las víctimas y a sus familiares porque a ninguna persona le agrada la idea de estar esperando que su caso se resuelva mientras permanecen vulnerables, ante las represalias del malhechor o de sus pares.

Eso hay que cambiarlo, pero también se deben fortalecer las instituciones. Si la nueva Ley contra el Crimen Organizado se aprueba tal como está, la FGR deberá invertir en capacitar a sus fiscales porque son ellos quienes tendrán que decidir cuáles casos podrán llevar a los tribunales especiales; además, tendrán que adquirir mayores facultades investigativas para sustentar sus acusaciones en un tiempo menor que el actual. La PNC también deberá hacer mayores esfuerzos para superar los fallos que ya se le han señalado: deficiencias en la protección de pruebas, en el cuido de la escena del delito y en la averiguación con los testigos, entre otros. Ahí está el problema, el éxito de este nuevo plan gubernamental depende demasiado de instituciones que se han mostrado débiles y por las cuales se ha hecho muy poco para mejorarlas en capacidades y recursos. Al final queda claro que lo que se busca con la propuesta es rapidez judicial, aunque se sacrifique la efectividad y se encarcele equivocadamente a quien pueda ser inocente.

Hay otro error de concepción en esta medida contra la violencia: vender la idea que se puede superar un problema social desde lo jurídico. Las causas de la criminalidad en El Salvador son múltiples y complejas; por eso, requieren también de respuestas sociales y económicas. Pero ni el gobierno de Saca ni los anteriores se han planteado eso porque supone cambiar el rumbo al régimen económico impuesto. Es cierto que se precisan medidas legales, que es acertado aumentar los patrullajes y que debe invertirse en la investigación científica; pero también lo es que debe fortalecerse la familia, favorecer mejores condiciones de vida y ofrecer oportunidades laborales para que la población pueda aspirar a una existencia digna. Si esto no se hace, únicamente se está metiendo la basura debajo de la alfombra.

También, es necesario reiterar el llamado a la unidad para enfrentar este flagelo, así como a la seriedad oficial y a la participación ciudadana consciente en la toma de estas decisiones que de alguna forma les afectarán. Ojalá que exista una verdadera apertura para valorar todas las propuestas que se hagan en esa comisión contra la violencia sin importar que para su ejecución deban afectarse algunos intereses particulares por el bien de la sociedad.

Por último, se debe tener claro que así como varios sectores han exigido que se frene la violencia, también deben estar dispuestos a ceder y poner de su parte para que se encuentre una solución verdaderamente efectiva. Desde asumir un compromiso serio contra la corrupción, pagar como se debe los impuestos y renunciar a los privilegios de los cuales se goza, hasta la participación en acciones para reinsertar a quienes todavía se pueda y para prevenir la criminalidad. La cresta de la crisis del Estado salvadoreño –en la víspera de los quince años del fin de la guerra– sólo se podrá superar si quienes se han servido de aquél asumen la parte que les toca de responsabilidad, para que el país se encuentre postrado ante la violencia. Y eso tiene que ver con la impunidad.

Presentamos a continuación las reflexiones del poeta Ernesto Cardenal en torno a la candidatura de Daniel Ortega de cara a las elecciones del 5 de noviembre en Nicaragua.

Sandinistas: no voten por el falso sandinismo
Ernesto Cardenal

Los sandinistas no deben confundirse: el FSLN de Daniel Ortega no es el sandinismo, sino su traición. Votar por Daniel es votar por Alemán. Ellos tienen un pacto que no se ha disuelto.

Por ese pacto, Daniel ha gobernado junto con Alemán. Ellos controlan la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, la Contraloría, el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Consejo Supremo Electoral. A ese pacto se debe que Alemán, condenado a 20 años, esté libre y Byron Jerez haya sido absuelto de todo. Por eso Alemán pudo robar descaradamente todo lo que quiso, sin ninguna oposición sandinista, y al mismo tiempo se han enriquecido desmesuradamente los del bloque de empresarios sandinistas, se han mantenido los megasalarios, no ha habido oposición a las imposiciones del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y de ahí la pobreza en que estamos.

¿Y han visto la plataforma de gobierno de Daniel, además de la alianza con Alemán? En ella hay contras (de los que torturaron y asesinaron) y somocistas y guardias de la EBBI. Incluso Daniel ha tenido acercamiento con "El Chigüín", quien ha dicho que le causó muy buena impresión. Sandinistas: ¡Voten por el verdadero sandinismo! El verdadero sandinismo es el del partido de Herty Lewites, su candidato espiritual, y el de Mundo Jarquín, escogido por él, y Carlos Mejía Godoy. De la comandante guerrillera Dora María Téllez, presidenta del partido, y los comandantes de la Revolución Henry Ruiz (Modesto), Víctor Tirado López y Luis Carrión, la comandante guerrillera Mónica Baltodano, el comandante guerrillero Hugo Torres, el comandante guerrillero René Vivas, Víctor Hugo Tinoco, Sergio Ramírez, Gioconda Belli, Luis Enrique Mejía Godoy, Luis Rocha, Fernando Cardenal, Carlos Tünnermann, Miguel Ernesto Vigil, Daisy Zamora, Vidaluz Meneses y tantos otros escritores, artistas, embajadores y ministros de gobierno de la revolución; los que no participaron de la piñata y los que no pactaron con el enemigo, y mucho pueblo humilde.

La bandera del sandinismo de Daniel (que nunca hubiera aceptado Sandino) es que no hay enemigos. UNIDA, NICARAGUA TRIUNFA es el lema de su campaña, que está por todo el país. Tres palabras cortas que son tres grandes mentiras. Admirable que en tan pocas palabras haya tanta mentira. UNIDA es una palabra falsa. Daniel ha desunido al sandinismo. A Herty lo expulsó por intentar postularse como candidato de su partido. Y su caudillismo ha apartado a miles del partido. NICARAGUA aquí no quiere decir nada. Para Daniel esa palabra son él y la Rosario y el pequeño grupo de la piñata. TRIUNFA es una palabra que no tiene sentido, tan sólo quiere decir que sería el triunfo de él y la Rosario y los piñateros, mientras toda Nicaragua pierde.

Y hablar de "Nicaragua unida" no es revolucionario. ¿Unión de explotadores con explotados? ¿Unión con ladrones? ¿Con somocistas? ¿Con criminales? ¿Abrazo de ricos y pobres, con los ricos siendo siempre ricos y los pobres siempre pobres? ¿Es esto la revolución? ¿Es esto sandinismo? La paz que predican es traición. Como la del Espino Negro. Recordemos a Sandino: "La lucha sigue".

El programa Ortega-Murillo está lleno de palabras de amor, reconciliación, unión, piedad religiosa, pero en el fondo lo que hay es rencor, deseo de venganza, prepotencia, intolerancia. Detrás de ellas se trasluce la falta de ética, la hipocresía y locuras rosado chicha.

Otra alianza de Daniel ha sido con el Cardenal Obando, que odió visceralmente al sandinismo y le hizo tanto daño, y por su antisandinismo es que llegó a Cardenal. Nos ha llenado de estupor esa campaña en la radio, la televisión y las grandes mantas desplegadas por todas partes: Obando, príncipe de la reconciliación, el FSLN te apoya. Como también la petición de Daniel de que se diera el Premio Nobel de la Paz a ese campeón del antisandinismo y protector de la contra. Y es a Daniel que se debe que el

presidente del Consejo Supremo Electoral sea Roberto Rivas, el protegido de Obando.

Daniel en cada elección se cambia de ropa, y hace creer que con eso ha cambiado. La verdad es que no hay ninguna verdad en él. A la revolución la ha traicionado. Primero le quitó al himno sandinista la línea de "el yanqui enemigo de la humanidad", y después quitó del todo el himno sandinista y lo ha reemplazado por otras músicas. La bandera rojinegra la cambió por el color rosado.

Con su demagogia (que contradice sus hechos) Daniel ha engañado a líderes de la izquierda latinoamericana, que creen que él representa aquí la izquierda. Por estar lejos comprendemos que puedan estar engañados, pero los sandinistas nicaragüenses no pueden estar engañados.

Es cierto que nuestras masas han estado por mucho tiempo abandonadas políticamente, y a eso se debe que muchos estén sumisos ante el caudillismo de Ortega. Pero al ir a votar deben tener presente que Daniel y Alemán son socios. Los dos ellos actúan al margen de la ley. Son dos mafias. Está esa bochornosa fotografía que todo el país ha visto: los dos juntos en primer plano sentados a la misma mesa, alegres como en un festín.

Es falso que los sandinistas deban ahora "cerrar filas". Como revolucionarios ahora deben rebelarse. Si se les ha comprado con cualquier soborno, o se les amenaza con cualquier chantaje, recuerden que a la hora de votar el voto es SECRETO. Ésta es la ocasión de librarnos de los caudillos, Daniel y Alemán.

¿A quiénes se debe que la Cementera Nacional haya sido devuelta a la familia Somoza? Ustedes han visto cómo los narcotraficantes están viniendo a Nicaragua. Algunos viniendo con todo un avión cargado de coca, al que después dejan abandonado. Y no hay ningún narcotraficante preso. Cada narcotraficante capturado tiene su precio. Muchos para quedar libres tienen que pagar millones de dólares. Recuerden bien esto: no hay ningún narco preso.

No crean esos discursos de una demagogia a gritos que por su misma voz hueca y engolada y sonsonete anticuado suenan falsos. Como muy bien ha dicho Gioconda Belli: "No podemos creer en las promesas de los que ya nos fallaron". ¿Cómo creer a Daniel Ortega cuando grita que está con los pobres y se presenta en los barrios pobres en un Mercedes Benz? Es triste ver guerrilleros que admiramos y que ahora son los nuevos ricos de Nicaragua. Ahora son empresarios millonarios. Uno de ellos es ahora una de las personas más ricas de Centroamérica. ¿Y qué decir de los que en un bautizo, una fiesta de quince años o una boda gastan 15,000 ó 20,000 dólares? ¿Para eso se derramó tanta sangre?

Hay potentados sandinistas que tienen hijos en el extranjero con becas que fueron creadas para los pobres que no pueden pagarse esos estudios. Eso es quitarles becas a los pobres. Daniel Ortega tiene un hijo con una beca del gobierno español que era para los pobres.

La gran gesta del FSLN, de Carlos Fonseca y de miles de héroes y mártires ahora está reducida al matrimonio Ortega-Murillo, y allí nadie manda más que ellos.

Pero si es un gran mal que el FSLN se hubiera corrompido hasta ese punto, un mal mucho mayor es que ese FSLN así de corrompido vuelva a gobernar. Muy malo es que hubiéramos perdido la revolución, pero mucho más malo es una falsa revolución. Y mucho más malo todavía es que una revolución falsificada nos gobierne.

El Frente Sandinista debe volver a ser lo que fue, para que los que murieron por esa causa no hayan muerto en vano.

Herty Lewites, el del alegre rostro (y tan simpático que hasta de sus enemigos se hacía querer), estando con el corazón enfermo, arriesgó su vida por el Rescate del Sandinismo, y dio la vida por ello. Un gran golpe fue su muerte. Pero ahora es el candidato espiritual de ese movimiento. Lo ha sustituido Mundo Jarquín, a quien él había escogido para vicepresidente. Un profesional comprometido con los pobres toda su vida, y que sabrá gobernar profesionalmente, sin ningún pacto más que con el pueblo. Es el único candidato con las manos limpias, como acaba de decir Bianca Jagger, mujer muy bella, por lo que ha sido famosa en el mundo entero, pero tiene una fama mejor que es la de defender todas las causas bellas del mundo. Y como vicepresidente tendríamos a Carlos Mejía Godoy, el gran cantautor nacional de Nicaragua y gran cantor de la revolución.

Cada quien es libre de votar por el que quiera, pero no debe votar contra su conciencia. Si es sandinista no debe votar por los que traicionaron el sandinismo, y a nuestros muertos.El futuro de Nicaragua es el que está en juego, y el del gran movimiento que generó Sandino.

Presentamos a continuación los resultados generales de la Segunda encuesta de percepción ciudadana del municipio de Guaymango, realizada, entre los días 15 y 22 de octubre de 2006, por alumnos y alumnas de la Escuela de formación socio política de Guaymango.

Segunda encuesta de percepción ciudadana Municipio de Guaymango, departamento de Ahuachapán

Escuela de formación socio-política de Guaymango CIDAI-UCA

Introducción

En el contexto del proceso de formación socio-política de líderes y liderezas del Municipio de Guaymango, impulsado por el Centro de Información, Documentación y de Apoyo a la Investigación (CIDAI), de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", entre los días 15 y 22 de octubre de 2006 se realizó la "Segunda encuesta de percepción ciudadana" del Municipio de Guaymango. Previamente, se había realizado una primera encuesta piloto, misma que sirvió de insumo para la ejecución de la encuesta que en estos momentos se da a conocer.

Ambas encuestas, planeadas en el marco del módulo de Vigilancia Ciudadana, desarrollado del 19 de agosto al 23 de septiembre de 2006, fueron diseñadas y ejecutadas por estudiantes de la Escuela de formación socio-política de Guaymango, con el apoyo del Coordinador del proyecto, Luis Armando González, y del profesor Rommel Rodríguez, director y analista económico del CIDAI, respectivamente.

En la encuesta piloto se entrevistó, de forma anónima, a 49 personas, mayores de edad –aproximadamente mitad hombres y mitad mujeres— de los distintos sectores del municipio. En la segunda, la muestra se amplió a 200 personas con las mismas características de las entrevistadas en la prueba piloto.

Ambos sondeos son, apenas, una primera aproximación a la percepción que tienen los habitantes de Guaymango de la actual gestión municipal. Sin embargo, constituyen un paso importante para dar vida a la práctica de la vigilancia ciudadana en el Municipio de Guaymango.

Las respuestas de las personas entrevistadas en las dos encuestas –49 y 200 personas, respectivamente— deberían servir de orientación a las autoridades de Guaymango acerca de cómo se percibe el desempeño de las actuales autoridades municipales.

En conjunto, los resultados de la "Segunda encuesta de percepción ciudadana del Municipio de Guaymango" son un llamado de atención para las actuales autoridades municipales, para la PNC y para la Casa de la Cultura. Así, para el 90.5% de los entrevistados el principal problema de Guaymango es la pobreza; para el 88.5% Guaymango no ofrece oportunidades para trabajar y vivir dignamente; para el 72.5% el trabajo de la PNC no es eficaz; el 76% no sabe qué hace la Casa de la Cultura; el 62% considera que la iglesias católica y evangélica no se preocupan por los problemas del municipio; el 7% dice no saber que haya un plan de desarrollo municipal para Guaymango; el 64.5% no sabe qué es un cabildo abierto; el 94.5% afirma no haber sido informado sobre cómo se manejen los recursos municipales; el

51.5% cree que los recursos municipales no se usan en beneficio de las comunidades; el 66.5% estima que los recursos municipales no son bien manejados por las autoridades; y el 48% de los entrevistados considera que hay corrupción en la alcaldía de Guaymango (frente un 18% que dice que no y un 34% que no sabe).

Municipio de Guaymango: información general

De acuerdo a la División Político Administrativa de El Salvador, el municipio de Guaymango pertenece al departamento de Ahuachapán. Se encuentra al sureste de Ahuachapán y linda, al norte, con Concepción de Ataco; al noreste, con San Pedro Puxtla; al sureste, con Santo Domingo de Guzmán; al sur, con Acajutla; y al oeste, con Jujutla.

La población del municipio es de 24,731 habitantes, de los cuales el 59.15% (14,628) se dedica a actividades agropecuarias. El ingreso per cápita mensual de la zona es de 307.20 colones ($35.11), lo que indica que la producción anual del municipio ronda los 91.16 millones de colones ($10.41 millones) aproximadamente. En Guaymango, el 47.20% (11,673) de los habitantes vive en condiciones de extrema pobreza. Concretamente, en el 60.80% de los hogares hay hacinamiento, un 56.80% de las viviendas carece de energía eléctrica y el 76.60% de las viviendas tienen piso de tierra.

Resumen de los resultados de la encuesta

1. ¿Cuál es el problema más fuerte en Guaymango?

Pobreza	Inseguridad	Deterioro de los recursos naturales	Total
181 (90.5%)	**7 (3.5%)**	**12 (6%)**	**200 (100%)**

2.¿Cree usted que Guaymango le ofrece oportunidades para vivir y trabajar dignamente?

Sí	No	A veces	Total
15 (7.5%)	**177 (88.5%)**	**8 (4%)**	**200 (100%)**

3. ¿Es eficaz el trabajo de la PNC en Guaymango?

Sí	No	No sabe	Total
54 (27%)	**145 (72.5%)**	**1 (0.5%)**	**200 (100%)**

4.¿Sabe qué hace la Casa de la Cultura de Guaymango?

Sí	No	Total
48 (24%)	**152 (76%)**	**200 (100%)**

5.¿Promueve la iglesia católica de Guaymango la solución de los problemas del municipio?

Sí	No	No sabe	Total
36 (18%)	**124 (62%)**	**40 (20%)**	**200 (100%)**

6.¿Promueve las iglesias evangélicas de Guaymango la solución de los problemas del municipio?

Sí	No	No sabe	Total
39 (19.5%)	**125 (62.5%)**	**36 (18%)**	**200 (100%)**

7.¿Sabe usted si hay un plan de desarrollo municipal para Guaymango?

Sí	No	No sabe	Total
19 (9.5%)	**140 (70%)**	**41 (20.5%)**	**200 (100%)**

8.¿Sabe qué es un cabildo abierto? (si sabe, pasar a la pregunta 9; si dice que no pasar a la pregunta 10)

Sí	No	Total
71 (35.5%)	**129 (64.5%)**	**200 (100%)**

9.¿Ha sido invitado o invitada a participar en alguno?

Sí	No	Total
13 (18.3%)*	**58 (81.7)***	**71 (100%)***

***** Los porcentajes fueron elaborados en base a los que contestaron que Sí en la pregunta anterior (71 personas).

10.¿Le han informado las autoridades municipales sobre cómo se manejan los recursos de la alcaldía de Guaymango?

Sí	No	Total
11 (5.5%)	**189 (94.5%)**	**200 (100%)**

11.¿Cree usted que los recursos municipales de Guaymango (vehículos, impuestos, etc.) son usados en beneficio de las comunidades?

Sí	No	No sabe	Total
58 (29%)	**103 (51.5%)**	**39 (19.5%)**	**200 (100%)**

12. ¿Cree usted que en la actualidad hay un buen manejo de los recursos municipales de Guaymango?

Sí	No	No sabe	Total
21 (10.5%)	**133 (66.5%)**	**46 (23%)**	**200 (100%)**

13. ¿Cree usted que actualmente hay corrupción en la alcaldía de Guaymango?

Sí	No	No sabe	Total
96 (48%)	**36 (18%)**	**68 (34%)**	**200 (100%)**

El semanario *Proceso* selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros, más significativos para la realidad salvadoreña, a fin de analizar las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación. *Proceso* es una publicación del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA).

SUSCRIPCION ANUAL

Correo electrónico	$ 50.00
El Salvador	
personal	$ 15.00
correo	$ 20.00
Centro América y Panamá	$ 35.00
Norte y Sur América	$ 65.00
Europa y otras regiones	$ 85.00

Las suscripciones pueden realizarse en El Salvador, en la Oficina de Distribución de la UCA, o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse al Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador, C.A. Para mayor información sobre *Proceso* marque (503) 2210-6671 o escríbanos a **cidai@cidai.uca.edu.sv**